



PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL
PERMANENTE DE CAJAMARCA



Expediente: 01278-2018-1-0601-JR-PE-05

Acusados: Ángel Valdez Chilón
Fernando Chuquilín Ramos
Segundo Emiterio Celis García
Juan Carlos Guevara Pérez
Eresvita Arrivasplata Vargas

Delito: Secuestro agravado

Agraviado: Felizardo Terán Cabanillas

Resolución número siete

Cajamarca, 7 de enero de 2021

Dado cuenta con el escrito presentado el 6 de enero de 2021 por el fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, Sexto Despacho Fiscal, y lo expuesto en sesión de audiencia de lectura de sentencia, además, del escrito de ampliación de fundamentos presentado por el abogado defensor, corresponde resolver la incidencia planteada por la defensa, sobre la base de las siguientes razones.

Antecedentes

1. Con el escrito de la defensa de los procesados, sustentado en el acto de lectura de sentencia, solicita «la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria de los ronderos: i) Juan Carlos Guevara Pérez, ii) Segundo Emiterio Celis García y iii) Fernando Chuquilín Ramos (sic)» según se aprecia de su petitorio. Como parte de su sustentación oral, el abogado precisó que su pedido corresponde a una reconsideración y lo reitera en su escrito de ampliación de fundamentos.
2. Diferido el pronunciamiento sobre este pedido de reconsideración y cumplido el traslado al Ministerio Público para obtener su posición institucional, el fiscal solicita se declare improcedente sobre la base de sus fundamentos, pues estos controvierten las certezas declaradas en la sentencia, ya que se ha condenado logrando el Ministerio Público, acreditar la responsabilidad penal de los acusados, desacreditando (sic) su presunción de inocencia; añadiendo que no se puede interferir en el ejercicio de las funciones del Poder Judicial; el pedido no tiene sustento jurídico y que la ejecución provisional de la condena es la condición que les correspondería a los sentenciados.

Consideraciones

3. Entre los preceptos generales de la impugnación se encuentra el principio de legalidad y la regla del artículo 404.1 del Código Procesal Penal señala que «Las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la Ley». Esto comporta que una sentencia solo puede ser impugnada mediante apelación. Así mismo, el artículo 412 procesal señala que «Salvo disposición contraria de la Ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere» y «Las impugnaciones contra las sentencias y demás resoluciones que dispongan la libertad del imputado no podrán tener efecto suspensivo».

Entre los recursos legalmente reconocidos (art. 413), no está el de «reconsideración» y el de reposición solo procede contra decretos y expresamente no procede contra resoluciones finales (415.1). Es el recurso de apelación el que típicamente corresponde interponer contra una sentencia [art. 416.1.a)] y el escrito presentado no corresponde a tal recurso.

4. Entonces, ocuparnos por el fondo del pedido no solo implicaría una ilegalidad procesal, por subrogar lo que oportunamente puede ser objeto de pronunciamiento por la Sala Penal de Apelaciones, sino también admitir que es posible la separación -en componentes- de la sentencia y en especial, de sus extremos resolutivos, decisión jurisdiccional que es, por antonomasia, única e indivisible. Si se pudiera reconsiderar solo un aspecto de la sentencia por un medio impugnatorio o solicitud, se estaría afectando la seguridad jurídica y los presupuestos de la cosa juzgada. Esto tiene clara correspondencia con el hecho de que una sentencia emitida no puede ser revocada -ni total ni parcialmente- por el mismo órgano jurisdiccional que la emitió, menos aún por «reconsideración» o «reposición» pues por el principio de legalidad recursal, contra la sentencia solo procede apelar y eso habilita la competencia de la Sala Penal de Apelaciones, ante la cual sí es posible formular la solicitud que ha presentado la defensa para la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria. Esta es una regla expresa, asociada únicamente al recurso de apelación, descrita en el artículo 418.2 del Código Procesal Penal y que -también- ratifica la ejecución provisional de la sentencia condenatoria a pena privativa de libertad efectiva, como es la que corresponde a este juzgamiento: «Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse». En consecuencia, por expreso mandato de la ley procesal penal, que es de orden público y de obligatorio cumplimiento, solo la Sala Penal de Apelaciones es el órgano jurisdiccional preestablecido por ley como competente para recibir el pedido de la defensa y para emitir válido pronunciamiento al respecto. El propio solicitante admite esta competencia, según se aprecia del tercer fundamento de su escrito ampliatorio presentado hoy.
5. A esto se une lo ya expresado en audiencia de ayer, respecto a que el pedido de suspensión de la ejecución provisional de la pena no es un pedido autónomo, sino uno subordinado a la impugnación legal. Entonces, solo mediante recurso de apelación se activa la competencia de la Sala Penal de Apelaciones y se añade ese pedido y su fundamento para que pueda ser objeto de pronunciamiento por dicho órgano colegiado. No es correcto considerar posible la concesión de la apelación con efecto suspensivo respecto a la ejecución provisional de la condena, porque la ley procesal no confiere tal facultad al juzgado de primera instancia. Sobre el particular, ya ha ilustrado la Apelación 15-2014-Lima del 27 de mayo de 2015, que también cita el solicitante en el quinto fundamento de su escrito de ampliatorio y que justifica se agreguen sus escritos al expediente para que sean de conocimiento por la Sala Penal de Apelaciones que determine la ley.

Decisión

Sobre la base de estas consideraciones, el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, por mayoría, declara **improcedente** el pedido del abogado defensor para la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria de Juan Carlos Guevara Pérez, Segundo Emeterio Celis García y Fernando Chuquilín Ramos y dispone se agreguen al expediente la solicitud primigenia y el escrito de ampliación de fundamentos. Notifíquese a casillas electrónicas.

Voto discordante del juez Ramos Tenorio

Con el debido respecto a la posición adoptada en mayoría, opinando por rechazar el pedido de la suspensión de la ejecución de la pena; al disentir presento mis argumentos por los cuales considero que se debió declarar fundada la solicitud.

1. El abogado defensor tuvo oportunidad de exponer de manera oral su pedido indicado, en resumen, que respecto a Fernando Chuquilín Ramos, su situación actual de salud es que ha sido intervenido quirúrgicamente por padecer de cáncer y necesita control permanente de pronóstico reservado, padece de diabetes y quistes renales bilaterales de lo cual necesita operación urgente; también que tiene que sufragar deudas en entidades bancarias; respecto a Juan Carlos Guevara Pérez, es el único sustento de su madre la señora Hormecinda Pérez Terán (61 años) también tiene deudas por pagar; y respecto a Segundo Emiterio Celis García tiene deudas por pagar y además es padre de tres menores hijos. También ha argumentado temas coyunturales como el riesgo de contagiarse del Covid-19.
2. Se tiene la respuesta del fiscal a cargo del caso quien solicita que se declare improcedente el pedido, sustentando entre otras cosas que con la sentencia se ha desvanecido el principio de presunción de inocencia que sirve de sustento a la defensa para respaldar su pedido; también que se ha demostrado que los sentenciados han trasgredido principios fundamentales de la persona humana; que nadie puede interferir en las decisiones del poder judicial y que el pedido no tiene fundamento legal.
3. Es verdad que el Código Procesal Penal no ha previsto un procedimiento diferenciado sobre este pedido, en tanto según prescripción del artículo 402.2, es el juez penal quien después de evaluar criterios de naturaleza del delito o gravedad y peligro de fuga, podrá disponer la suspensión de la condena. Se entiende, de una interpretación literal que corresponde al juez hacerlo solo en la sentencia. Sin embargo, la ley permite hacer una interpretación restringida, pues el artículo VII.3 del Título Preliminar del aludido código prescribe “La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente (...)” significando entonces que al restringir la interpretación, posibilita atender el pedido también a instancia del interesado.
4. Ahora bien, corresponde preguntarnos ¿Cuál es la finalidad de la suspensión de la ejecución? Es decir ¿cuál es su interpretación teleológica?, respondemos que se pretende evitar un daño irreparable al el condenado que se encuentra gozando de libertad, el respaldo de esta aseveración está en que este instituto está diseñado para aquellos acusados que se encuentren libres.
5. De otro lado, nos preguntamos ¿Cuál es la naturaleza de este instituto en sí?, es decir ¿Cuál es su contenido óntico? La respuesta la hallaremos en el artículo 2.24.e de la Constitución Política del Perú, que establece que: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, lo cual tiene basamento en el principio de Dignidad Humana (Expediente N° 00013-2009-AI) pues al otorgar la posibilidad que juez penal evite que una persona pierda su libertad, expresa que el Principio de Presunción de Inocencia no se agota con la expedición de la sentencia, sino que esta debe quedar firme.
6. Ahora bien, este Colegiado tiene la convicción que los sentenciados sí han desarrollado una conducta sancionada por la ley. Aprecio también una realidad innegable, que cuanto menos uno de los sentenciados ha presentado razones humanitarias para evitar ir a cárcel hasta que se resuelva su apelación, como es el padecimiento de cáncer, me refiero al sentenciado

Chuquilín Ramos, pues si atendemos al principio de Dignidad Humana, su encarcelamiento de cara al resultado de una apelación que no sabemos cuánto tiempo puede demorar, sería muy riesgoso para su salud y en consecuencia la trasgresión del aludido principio. No obstante, las razones humanitarias no son recogidas (por lo menos de manera expresa) por este dispositivo normativo.

7. El artículo 402, establece que se debe evaluar la naturaleza del delito, lo que en este caso se trata de uno de secuestro agravado, que según la imputación ha sucedido hace dos años y nueve meses aproximadamente el cual si bien se juzga grave, es inevitable reconocer que en otros casos similares (no iguales, pues de serlo, hubiera sido preferible decantarse por la absolución, lo cual evidentemente no es el caso), en su mayoría, han culminado absolviéndose en segunda instancia, es decir que ante este panorama, su gravedad se ve diezmada; de otro lado no se advierte que existan razones para establecer un peligro de fuga ya que los sentenciados han venido participando activamente en este proceso, por lo que material y formalmente es posible suspender la ejecución de la condena hasta que la Sala Superior se pronuncie sobre el fondo.
8. Por mi parte, considero como útil el fundamento la precaria salud de Chuquilín Ramos, pero preciso que no es el determinante para la decisión sino el anotado precedentemente, por ello se habilita que también se declare fundado el pedido de los demás solicitantes, al estar en la misma situación.
9. Los argumentos de la fiscalía no son de recibo, pues como hemos expuesto sí existe basamento legal para la solicitud; por ello tampoco se trata de un indebido avocamiento en la función jurisdiccional y además sobre la alusión a que se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia, diremos que este solo se relativiza con la expedición de sentencia, pues recién pierde vigor cuando ella queda firme.
10. Corresponde indicar las medidas restrictivas que en coherencia con la decisión permitan asegurar una posible ejecución de la misma, conforme a lo dispuesto por el artículo 288 del CPP.

Por estas consideraciones, mi voto es que se declare fundado el pedido de suspensión de la ejecución de la condena en favor de Fernando Chuquilín Ramos; Juan Carlos Guevara Pérez, y Segundo Emiterio Celis García. Debiendo cumplir con las siguientes reglas de conducta: a) no variar de domicilio señalado en autos y permanecer en él hasta el pronunciamiento sobre la apelación por parte de la Sala Superior de Cajamarca, sin autorización del juzgado; b) no participar en ninguna actividad relacionada a los hechos que han sido materia de juzgamiento, también hasta que la Sala Superior se pronuncie sobre la apelación. Todo bajo apercibimiento de revocar la medida. Oficiar a la Policía Nacional, para que se encargue de dar cuenta del efectivo cumplimiento de las reglas de conducta anotadas. Notifíquese.

Sr. Ramos Tenorio